



El estrés del mantenimiento de la paz

Fabio Avella Martínez



El informe final del grupo internacional de eminentes personalidades para investigar el genocidio de 1994 en Ruanda y sus consecuencias en la región de los Grandes Lagos¹, fue entregado el 12 de julio pasado a la Secretaría General de la Organización de la Unidad Africana, OUA. El informe concluye que la tragedia se produjo por la gran irresponsabilidad con la cual los actores internacionales manejaron la situación. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y los Estados Unidos a la cabeza, simplemente no hicieron lo suficiente para intervenir de manera apropiada antes, durante ni después de la tragedia, que costó la vida a 800,000 tutsis y hutus moderados.

El informe demuestra también que el genocidio no era un hecho absolutamente inevitable, como se quiso sostener por parte de las Naciones Unidas, y asegura que el Consejo de Seguridad podría haberlo

¹ "Ruanda: Le génocide qu'on aurait pu stopper"
Informe final divulgado en Internet, en el sitio
<http://www.oau-oua.org>

*Embajador de la
Carrera Diplomática y Consular
de la República.
Cónsul General de Colombia
en Montreal, Canadá.*

impedido, para lo cual hubiese sido necesaria solamente una fuerza internacional de tamaño razonable, con instrucciones precisas y un mandato fuerte, que obligara la aplicación de los Acuerdos de Arusha. Según el informe, Estados Unidos presentó excusas oficiales por no haber impedido el genocidio. El Presidente Clinton insistió en que el hecho obedeció a una mera ignorancia, pero los hechos prueban que el gobierno americano sabía exactamente lo que pasaba y mucho más un mes después del inicio del genocidio. No obstante, la política interna era más importante que lo que acontecía en Ruanda. Después de haber perdido 18 soldados americanos en Somalia en octubre de 1993; Estados Unidos no quería participar en ninguna operación de mantenimiento de la paz y se oponía sistemáticamente a que

el Consejo de Seguridad autorizara toda misión seria con participación americana.

En la fecha anteriormente señalada, se autorizó la primera Misión de Mantenimiento de la Paz en Ruanda (MINUAR), pero con un mandato muy débil y una capacidad mínima de operación. Aunque las advertencias fueron graves, no fueron suficientes como para persuadir a los miembros del Consejo de Seguridad de conferirle seriedad a la Misión. La única ocasión en que la MINUAR fue autorizada para interpretar su mandato de observación pasiva fue precisamente en el momento que se desencadenó el genocidio y todos los extranjeros fueron evacuados. No sólo se autorizó a la MINUAR a prestar apoyo en la operación de evacuación sino que también podía haber sobrepasado su mandato en caso de tener que garantizar la seguridad de los residentes extranjeros. Jamás se dio una autorización para garantizar la vida y la seguridad de los ruandeses.

El 11 de enero de 1994, la misión militar de las Naciones Unidas, a cargo del Teniente General (r) Roméo Dallaire, envió una comunicación a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la que anunciaba el genocidio. En dicho documento, transmitido vía fax, señalaba Dallaire que un infor-

mante de alto nivel había recibido la orden de censar nuevamente a todos los tutsis de Kigali y se sospechaba que el propósito era proceder a su exterminación, afirmando que "podían matar hasta 1,000 tutsis en 20 minutos."

Pocos canadienses podrían dar la batalla que Dallaire está librando ahora contra sus propios fantasmas personales. Haciendo frente a su infernal peso del deber, ha tenido que cargar con toda la culpa por el enorme genocidio ocurrido en Ruanda en 1994. Sus advertencias respecto de una inminente carnicería fueron ignoradas por la comunidad internacional, con la decisión de retirar de la zona de conflicto las tropas internacionales de cascos azules bajo su mando. Desde entonces, se le ha imputado mundialmente su culpabilidad por esta decisión y ha tenido que vivir con las consecuencias del fracaso del mundo para actuar.

Dallaire ha experimentado una grave crisis que lo ha llevado a reconocer que ha intentado atentar contra su propia vida. En fecha reciente fue visto borracho, tendido sobre una banca de un parque en la ciudad de Hull, en los suburbios de Ottawa, capital federal de Canadá. En carta que envió a la Radio CBC explicó su condición en términos muy sensibles: "El enojo, la rabia, la profunda

herida y la fría soledad que me separan de mi familia, de mis amigos y de la rutina diaria normal de una sociedad son tan poderosas que la opción de autoeliminarme es real y atractiva". El General acuñó un nuevo término que usó para describir su sentimiento: *"El estrés del mantenimiento de la paz"*. Y, enseguida, advirtió que en la medida que se envíen más tropas canadienses a servir en el extranjero en misiones de mantenimiento de la paz, más soldados regresarán a casa con esta clase de desordenes nerviosos.

Se podría asumir que los problemas de Dallaire son de una magnitud mayor que los experimentados por las tropas que lideró en Ruanda. Después de todo, él quería hacer algo para prevenir las matanzas de ruandeses, pero no recibió el apoyo necesario de la ONU, por desinterés y negligencia. Ese convencimiento debe consolarlo y llevarlo a preguntarse qué más hubiera podido hacer, si algo más se pudiera haber hecho en ese momento. Seguramente, tiene la razón al advertir sobre los problemas potenciales que enfrentan la líneas de mando y las tropas de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Si los países de Naciones Unidas son llamados cada vez más a respaldar y dar fuerza al respeto por los derechos humanos y la seguridad entre las

partes en conflicto en el mundo, ellos mismos deben estar seguros de que tienen el apoyo y la confianza de sus gobiernos y de la opinión pública.

Esta reflexión de lo que pasa en Canadá con el General Dallaire, aplicada al caso concreto de nuestros propios mandos militares y las tropas encargadas de mantener el orden público y mantener la paz en Colombia, significa que aparte de que nuestras fuerzas armadas sepan entrenarse propiamente y equiparse, también deberían contar con el apoyo, la confianza y la comprensión de la opinión pública para enfrentar los grandes dilemas éticos y morales, resultantes de la complejidad de la tarea del mantenimiento de la paz y la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y la subversión.

El mantenimiento de la paz es una tarea difícil, arriesgada e ingrata: una misión de la ONU en Sierra Leona este año se derrumbó después de que tropas de mantenimiento de la paz se vieron acosadas bajo el ataque continuo de los rebeldes, y actualmente se encuentran secuestradas por ellos. Las tropas en estas condiciones están bajo gran tensión. En efecto, se ha llegado a admitir que algu-

nos de los miembros de las tropas de paz canadienses que sirven en Croacia, intentaron envenenar a uno de sus comandantes puesto que temían que éste pusiera en peligro sus vidas. Por supuesto, incidentes como éste merecen investigaciones y acciones correctivas; sin embargo, el punto de Dallaire parece ser que siempre que la situación se ponga difícil, las tropas no deberían sufrir injustamente críticas y rechazos cuando vuelvan a casa.

Las tropas de las fuerzas militares que sirven en nuestro país deben estar seguras de que sus familiares, y ellos mismos internamente, están siendo tratados justamente y con dignidad por una nación consciente de lo que se está luchando a través de ellos, como por ejemplo el compromiso adquirido mundialmente con el Plan Colombia de luchar contra el narcotráfico y lograr su erradicación para el año 2005. Creemos que nuestro país, con el apoyo recibido internacionalmente, está al borde de un nuevo contrato social entre el público, el gobierno y las fuerzas armadas, en que se valorarán de ahora en adelante las acciones del Ejército Nacional más favorablemente. •

